El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala.



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Magistrada Sustanciadora

**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA**

**Providencia.** Sentencia – 2ª instancia – 30 de mayo de 2017

Confirma parcialmente sentencia que accedió a las pretensiones

**Proceso.** Ordinario laboral

**Radicación Nro.** : 66001-31-05-003-2014-00605-01

**Demandante:** María Magdalena Escobar Peña

**Demandado:** Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal

**Juzgado de Origen:** Tercero Laboral del Circuito de Pereira

**Tema a Tratar: PRESUNCIÓN DEL ART. 24 CST SE PROBÓ FRENTE A LOS DOS DEMANDADOS CON LA CONFESIÓN FICTA ENTRE OTROS (art.** 77 -2 del CPTSS). Hay lugar al reconocimiento de vacaciones e indemnización por no consignación de cesantías. Conforme al haz probatorio, se advierte que no existió motivo atendible en los demandados para dejar de efectuar la consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a causarse la de los años laborados, al no justificar tal omisión los abonos efectuados a la “liquidación”, como se denominan, que podría contemplar el auxilio de las cesantías; pues contrario a lo esgrimido por la Jueza de primera instancia, lo único que develan esos pagos, es la intención de defraudar a la demandante (…).

En Pereira, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.), la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación frente a la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso que promueve la señora **María Magdalena Escobar Peña** contra **Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal,** radicado 66001-31-05-003-2014-00605-01.

**REGISTRO DE ASISTENCIA:**

Demandante y su apoderado: Demandado y su apoderado:

**TRASLADO A LAS PARTES**

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos.

**ANTECEDENTES**

**1. Síntesis de la demanda y su contestación**

Pretende la señora María Magdalena Escobar Peña**,** que se declare que entre ella y los señores Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 02-01-2005 y el 19-04-2014, que terminaron los empleadores sin justa causa; en consecuencia, se le condene a pagarle las acreencias laborales que se causaron e indemnizaciones por el despido injusto, mora en el pago y por no consignación de las cesantías y la moratoria; además de las cotizaciones del sistema de seguridad social en salud y pensiones.

Fundamenta sus pretensiones en que: (i) prestó sus servicios como empleada doméstica a los familiares de los demandados, en su casa de habitación, siendo estos sus empleadores, desde el 02-01-2005 hasta el 19-04-2014, en diferentes horarios y con un salario para los años 2005 al 2007 de $400.000; 2008 al 2010 de $500.000 y del 2011 al 2014 la suma de $650.000.

(ii) El contrato de trabajo se terminó sin justa causa por parte de sus empleadores una vez regresó de vacaciones; sin que se le hubiere cancelado durante su relación laboral las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, los dominicales y festivos, los dos últimos salarios y se le dejó de afiliar al sistema de seguridad social.

**Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal** aceptaron la prestación personal del servicio doméstico en la casa de sus familiares, donde actuó como empleadora la primera en uso de su condición de administradora del hogar; que inició el 02-01-2006 hasta el año 2014, cuando se le informó a la actora, una vez regresó de vacaciones, la imposibilidad económica de continuar con sus servicios; sin que se le hubieren pagado sus prestaciones, afiliado al sistema de seguridad social por estar en régimen subsidiado; los demás hechos los negó.

Se opusieron a todas las pretensiones y propusieron las excepciones que las denominaron “inexistencia de despido injustificado de la demandante”, “inexistencia de la obligación de pagar recargo por trabajo dominicales y festivos-cobro de lo no debido”, “inexistencia de la obligación de pagar prestaciones sociales, cesantías intereses a la cesantías, primas de servicios y vacaciones”, “pago” y “prescripción”.

**2. Síntesis de la sentencia objeto de apelación**

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre la actora y la señora Lilibeth Sánchez Díaz, desde el 02-01-2006 y el 19-04-2014, que terminó de manera unilateral e injustificada por la segunda y exoneró de toda responsabilidad al demandado Fernando Valencia Sabogal.

Conclusión a la que llegó al confesar la demandada Lilibeth Sánchez Díaz la prestación de servicios como empleada doméstica a su favor, lo que corroboraron los testigos, al referir que fue ella quien contrató a la actora con el fin de atender a sus suegros, personas que por su estado de salud requerían de atención permanente; sin que exista prueba que respalde la condición de empleador en el señor Valencia Sabogal.

En consecuencia, condenó al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensiones, indemnización por despido injusto, la moratoria, luego de declarar en forma parcial la excepción de prescripción.

Por el contrario, negó el pago del recargo por trabajos dominical y festivos; las vacaciones al no quedar claro qué periodos disfrutó o no, pues de las de 2014, que confesó la demandante disfrutó, se ignora por cuánto las tomó; al igual que la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al no tener intención la demandada en desconocer los derechos que le correspondían a la trabajadora, que las disfrutó, como se probó con los abonos por $2.000.000 de las que se causaron hasta el año 2010 y $550.000 representados en abonos y en descuentos por préstamos.

**3. Síntesis del recurso de apelación**

Inconforme con la decisión la parte demandante la apeló y como puntos de desacuerdo expuso:

No había lugar a desvincular como empleador al señor Fernando Valencia Sabogal al quedar probado con la contestación de la demanda, la sanción impuesta a la parte demandada que dejó de asistir al proceso y los recibos que reposan en los folios 70 a 79; sin que se puede fraccionar, en materia de empleadas domésticas, la unidad familiar para determinar quién es el que administra el hogar, al ser la decisión de contratar el servicio doméstico del hogar como tal.

Debió reconocerse el pago de las vacaciones solicitadas, pues si bien no se precisó exactamente en la demanda que periodos de vacaciones se estaban tomando, debió ser imputado al que se generó en el 2013 y de esta forma conceder las vacaciones que se generaron en el año 2011 y 2012.

Por último se dijo que hay lugar a reconocer la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin que se pueda premiar ese actuar por los abonos que se hicieron, que no dicen a qué rubro se imputan; y lo que se indaga es qué pasó con las cesantías de los años 2012 y 2013.

**CONSIDERACIONES**

En atención al artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la competencia de esta Sala, está asignada por los puntos objeto de apelación. Asimismo se salvaguardarán los derechos y garantías laborales mínimas e irrenunciables de la actora, de conformidad con la sentencia C-968 de 21-10-2003[[1]](#footnote-1).

**1. Problemas jurídicos**

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea los siguientes cuestionamientos:

(i) ¿Se probó en el señor Fernando Valencia Sabogal la condición de empleador de la señora María Magdalena Escobar Peña?

(ii) ¿Procede el reconocimiento y pago de las vacaciones a pesar de haber gozado de ellas en un periodo previo a la finalización del contrato de trabajo?

(iii) ¿Existió mala fe por la empleadora y por ende es procedente la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990?

**2. Solución a los interrogantes planteados**

**2.1 Fundamento jurídico**

**Contrato de trabajo, elementos y sanción procesal del artículo 77 -2 del CPTSS**

Para desentrañar el problema jurídico planteado se hace necesario recordar, que los elementos esenciales que se requiere concurran para la configuración del contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que éste realice por sí mismo, de manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que faculta a éste para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (artículo 23 C.S. del T.).

Estos requisitos los debe acreditar la demandante, de conformidad con el art. 177 del C. de P.C., vigente para la época de la sentencia, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; carga probatoria que se atenúa con las presunciones legales, afirmaciones o negaciones indefinidas, que están exentas de prueba.

Bien. En materia laboral el artículo 24 del CST consagra la presunción del contrato de trabajo con solo demostrar la prestación personal del servicio; así mismo el numeral 2 del canon 77 del CPTSS menciona que se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión en el evento de no comparecer la parte demandada a la audiencia de conciliación.

Así las cosas, en la primera situación el hecho indicador o conocido a probar es la prestación personal del servicio, y en la segunda la incomparecencia de la parte; si ello sucede hay lugar a realizar la inferencia lógica del hecho desconocido, que lo constituye, en el primer caso la existencia del contrato de trabajo, y en el segundo, dar por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión; esto implica que la parte demandada sea quien corra con el deber de desvirtuar los hechos presumidos.

Luego, para cumplir este cometido la parte actora cuenta con los diferentes medios de prueba consagrados en el estatuto procesal civil que se aplica por remisión de la ley adjetiva laboral en lo no regulado por ella, entre ellos está la confesión, tanto la espontánea como la provocada, y dentro de esta última, la expresa y la ficta, esta que emerge según lo explicado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[[2]](#footnote-2) en el evento de no comparecer alguna de las partes a la audiencia del artículo 77 ib. y de aplicarse la sanción allí establecida; igualmente puede hacer uso de los hechos exentos de prueba como lo son: las negaciones o afirmaciones indefinidas y las presunciones legales consagradas en la norma procesal y sustantiva, en materia laboral.

En relación con la confesión espontánea, conforme al art. 195 del CPC, vigente para el momento de la sentencia, es la que surge de los hechos aceptados en la demanda o su contestación por el apoderado judicial, de quien la ley presume tiene la facultad para confesar, salvo las excepciones que consagra la misma ley.

De otro lado, la confesión ficta a la luz del art. 59 del CPL es la que se abre paso por la inasistencia de la parte que debe concurrir a rendir interrogatorio solicitado por la parte contraria, al remitir a la sanción fijada en el artículo 77 numerales 1 y 2 ib, de presumirse ciertos los hechos de la demanda o la contestación; que al tenor de la sentencia C-102 de 2005 lleva consigo una confesión ficta; condicionado obviamente a la comparecencia del apoderado que va a interrogar, pues de no asistir implica un desistimiento de la prueba y ninguna sanción procederá.

Entonces, de estar en presencia de una confesión espontánea y/o ficta de la parte demandada, le corresponderá a ésta desvirtuarla con los medios de prueba que tenga a su alcance, que de no hacerlo, será suficiente, sin más esfuerzos de la parte demandante, para que prosperen sus pretensiones, si con ella se acreditaron todos los requisitos de la acción que se depreca en la demanda.

**Calidad de empleador y sus características**

De conformidad con el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador es una parte del contrato de trabajo; sea persona natural o jurídica a quien se le presta un servicio personal, bajo su continua dependencia o subordinación, a cambio de una remuneración, en otras palabras, es quien recibe, se beneficia y remunera el servicio de una persona natural.

De la misma forma el artículo 23 *ibídem* consagra que la subordinación o dependencia faculta al empleador a exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, respecto del modo, tiempo o cantidad de trabajo.

**2.2 Fundamento fáctico**

De manera liminar y atendiendo el punto de partida de la inconformidad, esto es, la falta de valoración probatoria de la sanción impuesta a la parte demandada, debe advertirse que para que haya lugar a la confesión ficta, ya por inasistencia a la audiencia de conciliación o a rendir interrogatorio solicitado por la parte contraria (arts 77 y 59 CPL), es necesario que el funcionario judicial de manera concreta mencione en el acta los hechos que presume ciertos exigencia sobre la que se ha pronunciado el órgano de cierre de esta especialidad[[3]](#footnote-3), con el fin de que la parte en la que recae la sanción tenga claridad sobre ellos y pueda desvirtuarlos, teniendo en cuenta que puede ser infirmada al valorarse junto con los demás medios probatorios.

Y precisamente se observa dentro de esta actuación, que la jueza dentro de la audiencia obligatoria del artículo 77 del CPL, llevada a cabo el 06-08-2015 (fl.100), ante la inasistencia de la parte demandada la hizo merecedora de la sanción de tenerse por ciertos los hechos de la demanda del 1 a 18, como lo resalta el apelante; de tal manera que se tiene por probado por confesión ficta de los dos demandados que: (i) la señora María Magdalena Escobar Peña, prestó sus servicios de empleada doméstica, al servicio de la casa de habitación de Heberto Valencia y Ana Leonilde Sabogal, familiares de los señores Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal, quienes fueron sus empleadores, ubicada en el Poblado II de Pereira, (ii) la prestación personal del servicio se dio entre el 2-01-2005 y 19-04-2014, (iii) Los empleadores de manera injustificada dieron por terminado su contrato y no le pagaron en su vigencia ni al finalizar su vínculo las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones, ni la vincularon a la seguridad social.

Igual sanción debió operar al dejar de asistir los demandados al interrogatorio de parte a instancia de la demandante; sin embargo, la jueza omitió hacerlo vencido el término para justificarse los demandados.

Conforme a lo anterior, esta Sala entrará a determinar si los supuestos fácticos que se dieron por probados, en razón a la sanción procesal, que constituye prueba de confesión, se desvirtuaron con los documentos y prueba testimonial aportados al proceso; lo que justificaría la decisión de la Jueza de primera instancia en negar la calidad de empleador del señor Fernando Valencia Sabogal.

En cuanto a la prueba documental allegada por la demandante, consistente en el oficio dirigido a la señora Lilibeth Sánchez Díaz de 14-05-2014 por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, la constancia de no conciliación entre aquella y la actora de 16-05-2014 y certificados de tradición y libertad de varios inmuebles (fls. 13 a 26), nada aportan para acreditar la calidad de empleador del señor Valencia Sabogal, como tampoco para invalidar la confesión ficta.

Lo mismo sucede con los recibos visibles a folios 74 a 79, allegados por la misma parte demandada; los que reflejan los pagos quincenales que hizo, no solo la señora Sánchez Díaz, sino también el señor Fernando Valencia Sabogal a la señora María Magdalena Escobar Peña y otros como abonos a su liquidación y préstamos. Recibos que van desde enero de 2008 a octubre 2012, lapso que está comprendido dentro del solicitado en la demanda y que confesaron los demandados.

Documentos que son auténticos al tenor del parágrafo del artículo 54A del CPL, de los que se puede inferir que el señor Valencia Sabogal remuneró el servicio personal prestado por la actora, lo que se justifica en la medida que los haya recibido o beneficiado de ellos; lo que no hay duda sucedió por ser los padres del señor Valencia Sabogal a quienes cuidó.

Sin que sea de recibo el argumento esgrimido por los demandados, que la empleadora solo lo fue la señora Sánchez Díaz como administradora del hogar, concepto revaluado en la época en que nos encontramos, al cumplir este rol también el señor Valencia Sabogal, como integrante del grupo familiar; máxime que, al tenor del Decreto 824 de 1988 y sentencia C-871-2014, las funciones desarrolladas por quienes prestan el servicio doméstico se hace a un hogar o casa de familia.

De otro lado, de aceptarse tal tesis, y dejarse de reconocer como empleador a quien también conforma la dirección del hogar (esposo), se benefició y remuneró el servicio, atentaría contra los derechos económicos, no solo de la demandante, al no lograr el pago total de la condena, sino de la demandada, quien por sí sola tendría que enfrentar el pago de la misma.

Tampoco desvirtúa la confesión ficta de los demandados, las declaraciones de Gloria Inés Suárez, Diego Fernando Carvajal Álvarez, Luz Piedad Escobar Peña y Patricia Eugenia Ruiz, al ser testigos de oídas, al conocer los datos que expresaron porque la actora se los dijo, sin que lo hayan percibido por sus propios sentidos; así las cosas, se limitaron a manifestar lo que les había dicho la demandante, lo que creyeron saber, sin fundamentos serios y objetivos; de lo que se sigue que tampoco nada conozcan de la situación del señor Valencia Sabogal.

Así las cosas, no se comparte la argumentación de la Jueza de primera instancia, quien debió valorar la confesión ficta de los hechos de la demanda al no ser derruida y con base en ella resolver la controversia.

En este orden de ideas, al probarse por confesión ficta la prestación personal del servicio a favor de los dos demandados hay lugar a aplicar la presunción del artículo 24 del CST, de tal manera que emerge sin dubitación alguna que entre la señora María Magdalena Escobar Peña y los señores Lilibeth Sánchez Días y Fernando Valencia Sabogal existió un contrato de trabajo, que inició el 2-01-2006, conforme a la confesión espontánea, fecha aceptada al contestar la demanda, que no cuestionó la parte actora en su recurso de apelación y finalizó por causa imputable a ellos el 19-04-2014, hito final y motivo confesado fictamente; por lo que hay lugar a revocar el numeral décimo de la sentencia apelada y consecuente con ello, al demostrarse por este medio el incumplimiento de las obligaciones laborales a las que fue condenada la señora Sánchez Díaz, las mismas se impondrán al señor Valencia Sabogal al no mostrar inconformidad la recurrente sobre sus valores.

Queda por definir si hay lugar al reconocimiento y pago de las vacaciones y sanción por no consignación de cesantías, punto discutido por la parte actora al negarlo la primera instancia, por lo que se estudiarán en conjunto a continuación.

**2.2. Vacaciones**

El numeral 1 del artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo señala que los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

En relación con el tiempo de disfrute, el artículo 187 *ibídem* establece que estas deben ser concedidas por el empleador, a más tardar dentro del año subsiguiente, por lo tanto, el término de prescripción de que trata los artículo 488 CST y 151 CPTSS correrá después de vencidos los dos años que tiene el empleador para fijar su disfrute. Ahora de no haberse disfrutado las vacaciones en vigencia del contrato, al terminar este hay lugar a la compensación de las no prescritas, que se liquidará con el último sueldo (art. 1 Ley 995/05) y siempre y cuando la acción laboral se hubiere incoado dentro de los tres años siguientes a la terminación del contrato de trabajo.

Analizado el punto de inconformidad de la parte demandante, se advierte que le asiste razón, en la medida en que no es posible inferir, por el hecho de haber confesado esta espontáneamente el disfrute de vacaciones del último periodo causado, que también lo hizo respecto de las anteriores, si en cuenta se tiene que al negar en los hechos de la demanda que no le cancelaron sus vacaciones, se constituyó en una negación indefinida exenta de prueba, sin que lograra desvirtuarla la demandada al no aportar los recibos de pago por tales conceptos, salvo la causada para el último periodo, esto es, del año 2013, que confesó espontánea de la demandante las disfrutó.

Así las cosas, las vacaciones que se generaron por los años 2009, 2010, 2011 y 2012 y la fracción del 2014 serán reconocidas al no haber prescrito al terminar el contrato y presentarse la demanda 6 meses después de haberse finiquitado el vínculo laboral. Cosa diferente sucede con las causadas por los periodos del 2006 al 2008 al operar el fenómeno de la prescripción antes de haberse terminado el contrato.

Así las cosas, el valor a pagar por vacaciones es de $1’397.500.

**2.3 Indemnización por no consignación de las cesantías y su prescripción**

En torno a este aspecto, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 establece que antes del 15 de febrero del año siguiente, se deberá consignar el valor liquidado por concepto de cesantía, en el fondo de cesantía que haya elegido el trabajador, y que en caso de incumplimiento por el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Sin embargo, esta sanción no es automática ni inexorable, como lo ha expuesto el órgano de cierre de esta especialidad[[4]](#footnote-4).

Entonces, se debe analizar si la conducta morosa del empleador estuvo o no justificada con argumentos, que pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí puedan considerarse atendibles y justificables que lo hayan llevado al convencimiento de que nada adeudaba o en este caso, no debía realizar la consignación del auxilio de cesantías; para ubicar así el actuar del empleador en el terreno de la buena fe que lo exoneraría de la sanción.

Buena fe que equivale, en términos de nuestra Superioridad[[5]](#footnote-5) en obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta; por el contrario, la mala fe es obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud.

Conforme al haz probatorio, se advierte que no existió motivo atendible en los demandados para dejar de efectuar la consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a causarse la de los años laborados, al no justificar tal omisión los abonos efectuados a la “liquidación”, como se denominan, que podría contemplar el auxilio de las cesantías; pues contrario a lo esgrimido por la Jueza de primera instancia, lo único que develan esos pagos, es la intención de defraudar a la demandante, al realizar el primero por $2.000.000[[6]](#footnote-6) el 22-11-2011, después de 4 años de surgir la obligación de consignar el inicial (14-02-2007) y que por obvias razones no cobijaron los auxilios de cesantías causados por los años 2011, 2012, 2013; los que nunca se consignaron, a pesar de conocer los empleadores de este deber.

También resulta equivocada la connotación de abonos que le dio la a quo a dos pagos por $100.000 en julio y agosto de 2013 (fl.77), cuando los mismos tenían la anotación de “odontología”; riesgo a la salud que debían asumir los empleadores al omitir la afiliación de la demandante al sistema de salud.

Por lo anotado, se demostró la mala fe en los empleadores en la omisión en consignar el auxilio de cesantías de las causadas en la relación laboral, al conocer el vínculo laboral con la demandante, el carácter prestacional de las cesantías, además irrenunciables, que tiene regulación propia para su pago, que debe ser acatada por el empleador; lo que le significa asumir las consecuencia de su omisión; en este caso, el pago de la indemnización prevista en la misma ley.

Así las cosas, lo considerado por la jueza de primera instancia sobre este concepto resulta desacertado, por lo que próspera la apelación de la parte demandante; en consecuencia, se ordenará pagar la indemnización por no consignación de cesantías de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, un día de salario por cada día de retardo; para el primero, por haber operado el fenómeno de la prescripción, desde el 28-10-2011 hasta el 14 de febrero de 2012; para los dos siguientes desde el 15 de febrero del año posterior a su causación hasta el 14 de febrero, salvo el último que se genera la sanción hasta el 20-04-2014, cuando terminó el contrato, momento a partir del cual seguirá la sanción del artículo 65 del C.S.T. El auxilio de las cesantías de los años 2006 al 2009 prescribió al interrumpirse esta sanción solo con la presentación de la demanda, que ocurrió el 28-10-2014. Lo que arroja como valor total a reconocer por este concepto $18.753.333.

Sobre este tópico de la prescripción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[[7]](#footnote-7) ha dicho que esta sanción moratoria, surge a la vida jurídica el 15 de febrero de cada anualidad, pues antes de ese día, recae la obligación del empleador de consignarla, por lo tanto, desde aquel día se hace exigible.

**CONCLUSIÓN**

En armonía con lo expuesto, la Sala revocará el numeral 10 de la decisión de primera instancia y se modificarán los numerales 1, 2, en el sentido de declarar la existencia del contrato de trabajo entre la señora María Magdalena Escobar Peña y los señores Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal, que terminó por culpa imputable a estos. Así mismo se modificarán los numerales 3, 4, 7, 8 para extender las condenas impuestas en estos al señor Fernando Valencia Sabogal.

Asimismo se adicionará en el numeral 3 de la sentencia para reconocer a favor de la parte actora y a cargo de los demandados el pago de las vacaciones e indemnización por no consignación de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Costas en esta instancia para los demandados en favor de la parte demandante al prosperar el recurso de apelación. Sin perjuicio de que las agencias en derecho se reajusten por el a quo atendiendo las condenas impuestas en esta instancia.

**DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, Sala Cuarta Laboral,** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** **REVOCAR** el numeral 10 dela sentencia proferida el 07-12-2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que promueve la señora **María Magdalena Escobar Peña** contra **Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal.**

**SEGUNDO.** **MODIFICAR** los numerales 1 y 2 en el sentido de **DECLARAR** la existencia del contrato de trabajo entre la señora María Magdalena Escobar Peña y los señores Lilibeth Sánchez Díaz y Fernando Valencia Sabogal con inicio el 2-01-2006 hasta el 19-04-2014; que terminó por culpa imputable a estos.

**TERCERO. MODIFICAR** los numerales 3, 4, 7, 8, en el sentido de extender las condenas impuesta a la señora Lilibeth Sánchez Díaz al señor Fernando Valencia Sabogal.

**CUARTO.** **ADICIONAR** el numeral 3 de la sentencia proferida el 07-12-2015 con los literales c) y d) así:

**TERCERO**: ORDENARLE a la señora Lilibeth Sánchez Díaz y al señor FERNANDO VALENCIA SABOGAL que procedan a cancelarle a su extrabajadora MARIA MAGDALENA ESCOBAR PEÑA las siguientes sumas de dinero:

c) $1’397.500 por concepto de vacaciones por los años 2009; 2010; 2011; 2012 y la fracción del 2014.

d)$18.753.333 por concepto de indemnización por no consignación de cesantías por los años 2010; 2011; 2012; 2013; un día de salario por cada día de retardo para el primero, por haber operado el fenómeno de la prescripción, desde el 28-10-2011 hasta el 14-02-2012; para los siguientes desde el 15 de febrero del año posterior a su causación hasta el 14 de febrero, salvo el último que se genera la sanción hasta el 20-04-2014, cuando terminó el contrato, momento a partir del cual seguirá la sanción del artículo 65 del C.ST.

**CUARTO:** Lo demás queda incólume por no ser motivo de apelación

**QUINTO.** **CONDENAR** en costas en esta instancia a los demandados en favor de la parte demandante. Sin perjuicio de que las agencias en derecho se reajusten por el a quo atendiendo las condenas impuestas en esta instancia.

Notificación surtida en estrados.

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por las personas que han intervenido.

Quienes integran la Sala,

**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA**

Magistrada Ponente

**JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ** **ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN**

 Magistrado Magistrada

\*Anexo



1. . M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [↑](#footnote-ref-1)
2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral, Sentencias del 25-05-2016. Radicación 42159. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán y del 01-07-2015. Radicación 44186. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sentencia del 06-02-2013. Radicación 40498. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentencia de 11-11-2015, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz y 18-05-2016. Radicación 47048. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. [↑](#footnote-ref-4)
5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16-03-2005. Radicación 23987. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. [↑](#footnote-ref-5)
6. Folio 79. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sentencias del 01-02-2011. Radicación 35603. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. [↑](#footnote-ref-7)